

## **A C C I Ó N E S**

### **OBJETIVO PRIMARIOS**

#### **RESTAURAR LAS REGLAS ROTAS.**

Pero: ¿Qué reglas se rompieron y cómo deben ser reparadas?

#### **LISTA DE REGLAS ROTAS**

- 1.- Rota la regla de la legitimación y autenticidad.
- 2.- Rota la regla de la armonía.
- 3.- Rota la regla de la integralidad.
- 4.- Rota la regla de la concentración.
- 5.- Rota la regla de la “soberanía”.
- 6.- Rota la regla de la perseverancia de la forma de gobierno.
- 7.- Rota la regla de la legitimidad.
- 8.- Rota la regla del orden público.
- 9.- Rota la regla de la seguridad jurídica.
- 10.- Rota la regla del equilibrio social de clases.
- 11.- Rota la regla de la igualdad en la inclusión de todos los individuos en el proyecto democrático nacional.
- 12.- Rota la regla de la auténtica representatividad política democrática no relativa ni proporcional.
- 13.- Rota la regla de la inviolabilidad constitucional.
- 14.- Rota la regla de procesos electorales válidos.
- 15.- Rota la regla de adiciones y reformas lícitas como lo dispone el artículo 127 de la Constitución de 1857.
- 16.- Rota la regla de la Supremacía Constitucional establecida en el artículo 126 de la Constitución de 1857.

#### **EXPLICACIÓN DEL ROMPIMIENTO Y CÓMO DEBEN SER REPARADAS**

##### **1.-Rota la regla de la legitimación y autenticidad:**

La posición de los usurpadores que tomaron el poder por la fuerza de las armas, como fueron el General Díaz, el señor Madero, el General Huerta, el señor Carranza y el General Calles, y otros, fue ilegal, pues sin tener derecho al no haber sido electos, se hicieron gobernantes provocando el estado de esclavitud y prisión de nosotros todos los gobernados que conforman el pueblo mexicano. Se comprueba la ilegitimidad de dichos gobiernos en virtud de que los actos realizados para tomar el poder, eludieron fraudulentamente el cumplimiento del derecho mexicano, el orden público y las costumbres internacionales.

La imposición arbitraria del código particular de dichos amotinados que es la Carta Rebelde de 1917, suplantó indebidamente la vigencia de nuestra constitución legítima de 1857, alterando las reglas del mandato constitucional, los elementos de orden y la forma de gobierno o modo ordenado de existir de las relaciones sociales de todos los mexicanos.

La actitud agresiva de los rebeldes de 1910 manifestada por el uso de las armas, se derivó como respuesta a una situación social de desacuerdo con la metodología utilizada por los régimen político de gobierno existentes, pero, la conducta violenta no puede ser jamás la expresión de la razón ni de la voluntad general, resultando ser solo la idea perversa de un puñado de aventureros, pues la constitución de 1857, vigente aún en el año de 1917, disponía claramente en sus artículos 9, 39, 80, 81, 82 y 127, los medios adecuados para cambiar el régimen político de gobierno, es decir, aquellos que entraron en rebelión, tuvieron en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, pues los procedimientos pacíficos (*elemento de orden*), legales (*elemento de justicia*), legítimos (*elemento de derecho*), para cambiar de régimen político de gobierno, no debieron ser por la vía de la violencia y el derramamiento de sangre inocente, dado que no era considerada como una vía legalmente correcta estando absolutamente descartada, y la legalidad que figuraba como un atributo o elemento esencial de orden público fue ignorada por los cobardes asesinos, y la convivencia en las relaciones sociales entre los mexicanos fue trastornada injustamente.

Así pues, siendo ilegal la existencia y vigencia de dos constituciones (o códigos políticos) en una misma época, bajo el uso de la fuerza y de las armas, ilegalmente los intrusos asumieron los cargos de los tres poderes del Estado, y en un número no mayor de 218 impostores, sometieron como esclavos y prisioneros de sus mandatos a 15 millones de ciudadanos mexicanos de aquel entonces.

En teoría se entiende que quien desempeña el papel de “*representante*”, y que son los “políticos”, quedan sometidos al cumplimiento del interés general contenido en las leyes, su voluntad no puede estar en pugna con la de la colectividad; el desvío o exceso del quehacer de los sirvientes en el gobierno, no puede invocar razones de

interés público; por tanto, si no se satisface este requisito habrá la posibilidad de obtener la ineficiencia, ineficiencia y desacato de aquello que tienen obligación de obedecer.

El deseo original de la sociedad consiste en ayudarse de los expertos en el arte de la política para lograr determinados beneficios comunes de interés público, acciones tendientes a la consecución de un bien para la humanidad, en cambio, las actuaciones de los maleantes golpistas y revolucionarios, no puede invocar razones apoyadas en la ley, lo que nos demuestra que actuaron a título personal, con la responsabilidad que implicaba el derrocamiento de un gobierno legalmente establecido que encabezaba el entonces presidente electo Don Sebastián Lerdo de Tejada.

La razón y la ley nos indican por ejemplo, que el derrocamiento del presidente Don Sebastián Lerdo de Tejada, por parte del sirviente militar golpista Porfirio Díaz es ilegítimo, pues éste no obtuvo el ejercicio del poder por la vía de los procesos de elección popular dispuestos en el derecho positivo, y contenido en la Constitución de 1857; luego, y al haberlo obtenido por la vía de la violencia y de la fuerza de las armas, hizo ilegal e ilegítima su condición de “representante”, atropellando con ello las disposiciones de orden público y el modo de existir pacífica de las relaciones sociales de la sociedad civil mexicana.

Por otra parte, el uso de la violencia y de la fuerza de las armas sucedió a raíz del movimiento revolucionario de 1910, tuvo por objeto derrocar al antes dictador Díaz; fue una acción que tampoco justificaba de manera alguna la posibilidad de obtener una “representatividad legítima” en el ejercicio del poder, pues el poder de gobernar tampoco lo obtuvieron por la vía de los procesos de elección popular, dispuestos en el derecho constitucional vigente en esa época. La “*representatividad legítima*” en el gobierno se obtiene invariablemente con base en las normas de la ley, obteniendo el voto mayoritario en los procesos de elección popular, por lo cual no existe otra forma alternativa.

La ilegitimidad de los gobiernos de Díaz, Madero, Huerta, Carranza y Calles, así como los cómplices que hasta la fecha han cooperaron con éstos, solo comprueba sometiéndolas al examen del artículo 128 de la Constitución de 1857, que todos ellos realizaron actos de trastorno social y rebelión; planearon en contra de la ley y las instituciones, realizaron trastornos y alteraciones contra el orden público, establecieron gobiernos contrarios los principios que ella contiene, violentaron el principio de inviolabilidad constitucional, y sometieron a sus dictados al conjunto de los pobladores del pueblo de México. Es el caso de que, jurídicamente no existe un derecho al golpe de estado militar o a la rebelión revolucionaria civil, por lo tanto obtenemos que, las actitudes golpistas y de amotinamiento sucedidas en la República mexicana, se apartan en absoluto de la ley que es la que nos impone, en este caso, los límites

(*elemento de orden*) de la conducta tanto de la sociedad civil como de las sociedades políticas.

Se ha buscado en la ley los fundamentos jurídicos que permitan medir las actitudes de los gobiernos intrusos, hasta se han consultado libros que explican las “razones de la fuerza” pero en todos ellos no se encuentran justificados los motivos que se puedan tomar en consideración, en favor de los rebeldes, pues toda actitud violenta y el uso de las armas colocó a los facinerosos en la tesis de ilegalidad prevista por el artículo 128 de la constitución legítima de 1857.

Resultan carentes de legitimidad los gobiernos emanados de los golpes militares, y los surgidos de la rebelión civil de 1910, por haber eludido fraudulentamente el derecho mexicano, y ser manifiestamente incompatibles con el orden público en los términos de la legislación mexicana y las costumbres internacionales. La historia nos arroja interesantes aspectos relativos a ciertas imperfecciones en el sistema democrático nacional; tan substanciales son que se puede asegurar que el pueblo mexicano en realidad no es una República democrática.

Pensamos ingenuamente que los “*sirvientes intrusos*” (los políticos y los militares) de antes y sus cómplices que llegaron después, están bien muertos, o que ya no existen ni trabajan en el gobierno, siendo que en la realidad usurpan nuestro pensamiento, nos oprimen a su antojo. Los “*políticos muertos*” y los intrusos que vinieron después, los que ya no están trabajando en el gobierno, siguen siendo señores y dueños de los vivos; (debiera decir tontos) pues en las escuelas gran parte del tiempo de enseñanza se emplea para explicar y aprender sus vicisitudes, aventuras, vergüenzas y teorías. La historia mexicana es un interminable libro de muertos y hechos de vergüenza. El pueblo debe obedecer sus códigos sus fórmulas de pensamiento, sus órdenes impositivas. Nuestros museos están llenos de sus obras, en nuestras plazas se pavonean imágenes de difuntos dizque “*famosos héroes*”, ya sea a caballo, con armas o en actitud amenazante, esas fantochadas no pueden ser la representación del orgullo de la Patria mexicana; es necesario concluir de una vez por todas, con esta engañosa y perpetua esclavitud orquestada por los amotinados, establecer un orden de cosas completamente nuevo y plasmarlo en la proyectada “*Constitución Social Nacional del Pueblo Mexicano*”

Todos sabemos que el “*partido único dominante*” integrado por políticos intrusos asociados en los partidos, han mantenido su poder hegemónico; quienes con reformas políticas y leyes electorales continúan con el juego de las falsas e inexistentes elecciones; es desde donde proviene otra parte del engaño, pues se da una “falsa” apertura a la alternancia de partidos pero, de poco ha servido ya que los “*nuevos partidos*” en el gobierno, resultan ser de filosofía contraria a los principios de la forma de gobierno democrática prevista en la constitución.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Recobrar la legitimidad en el gobierno y la autenticidad de la carta política de los mexicanos, tal y como lo ordena el artículo 128 de la Constitución legítima de 1857.

## **2.-Rota la regla de la armonía:**

No existe la armonía interna, paz interior, ni equilibrio funcional del organismo político de gobierno que conducen los actuales sirvientes públicos. Las fuerzas divergentes de los representantes populares, libradas a sí mismas, generalmente desgarran al conjunto en su intento de llevarlo en direcciones contradictorias y, con bastante frecuencia, se produce: o bien una fractura del organismo bajo la forma de una secesión; o bien un enfrentamiento violento en la forma de una guerra civil como la de 1910, en donde los bandos terminan considerándose mutuamente como enemigos políticos.

Ahora bien, sobre la *“división de los poderes”*, tenemos que esta expresión entendida en sentido literal tiene un significado simbólico, nada tiene que ver con la esencia del gobierno, pues no puede haber más que un gobierno, es decir, no puede haber más de un poder y no tres distintos, claro es que pueden ser vario y múltiplo en sus acciones, tareas o facultades las que no pueden ser ajenas al factor de *“unidad”*, esto quiere decir que cuando la sociedad civil necesita para el cumplimiento de sus objetivos algo, tanto así debe tener el gobierno de facultades para cumplir tal necesidad. Si la sociedad necesita leyes; luego el gobierno tiene poder para darlas: (legislativo), de actos de administración (ejecutivo), de discutir los hechos controvertidos e imponerles coacción (judicial), pero todo en un solo cuerpo de gobierno el cual se rige por el sistema del código político que regulan su equilibrio ordenado.

Siendo la *“Constitución Política”* un contrato de trabajo al que está sometida la acción de los *“políticos”*, es con el fin de tender un círculo (corral) que someta todos los movimientos de los sirvientes al principio invariable de la *“unidad”* y del estado de derecho. Reunir la diversidad de voluntades con la unidad entre los subordinados es el gran problema que nos ha significado la anarquía y el desorden. Unos se sacrifican por la *“unidad”*, otros buscan la *“diversidad”*, en fin, lo que nunca se tienen es la perfecta *“armonía”* que debe haber entre todos, para que no formen más que un solo sistema de acción y la maquinaria funcione correctamente. Ningún pueblo tocará jamás esta perfección absoluta por que la sociedad civil no se da tiempo para ordenar su servidumbre política, así pues, si la pluralidad en la unidad es un principio entonces, ¿dónde está la utilidad del código constitucional?; si no se pueden conseguir de manera absoluta; la unidad y la armonía en el gobierno, el progreso, la libertad y el orden, acaso ¿nunca estarán presentes?

Los “*atributos*” o poderes dados a los sirvientes, no engendran ninguna personalidad superior frente a los patrones (mandantes), lo que se les confiere son “atributos” oficios, ocupaciones o tareas, no se debe perder de vista la superioridad numérica y jerárquica de la autoridad nacional del pueblo. No basta tener peones, ordenarlos, clasificarlos, conferirles algunas atribuciones y prevenirles de ciertas reglas contractuales constitucionales; se requiere de la presencia reguladora y constante de la sociedad civil (del pueblo) que permita eludir toda oposición, la divergencia, la inconformidad y la ineficiencia de los subordinados, una presencia real de mando supremo que garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que existe la figura jurídica del Estado.

Investigaciones en ciencias políticas concluyen que la utilidad de los “*políticos*” y sus partidos, no hay que definirla en función de su declaración de principios, de sus planes de acción, de su filosofía personal o de sus discursos floridos, sino en atención a lo que hacen diariamente por el cabal cumplimiento de sus oficios; lamentablemente también en las conductas de los sirvientes se generan fuerzas negativas que operan sobre la sociedad civil deformándola, las que se originan en sus sentimientos, egoísmos, pasiones, instintos e intereses rijosos o de plena comodidad y el constante relajamiento (holgazanería-haraganería) que les provoca cierto grado de irresponsabilidad, el que les impide actuar con armonía y eficiencia, el que les da tiempo para confabular, conjurar, intrigar, conspirar, maquinan, y en ocasiones aliados con otros, cometer complot en perjuicio del interés público de la sociedad civil. Generalmente no cooperan, se crea una personalidad superior ficticia, una clase especialmente diferenciada, muy distante de la gente común, ellos hacen en sus partidos unos procesos de selección interna cerrada en agrupaciones políticas especiales, lo que supone un conflicto forzoso con la mayoría a las personas a las que solo utilizan como mero instrumento de utilidad para las votaciones.

Ese grupo pequeño, camarilla, fracción o bando cerrado de políticos, eligen, registran y promueven a su gusto las candidaturas de los que habrán de gobernar más tarde a toda la población, la generalidad del pueblo no intervienen en esos procesos internos de selección, su opinión no cuenta, tiene un lugar secundario, su intervención ocurre pero hasta el día de las votaciones, en donde inevitablemente no hay otra alternativa que adherirse a una propuesta preestablecida, en realidad no hay una libertad de elección, es decir, de hecho no hay acuerdo, concordia o conformidad previa en la pretensión engañosa de la supuesta elección de representantes. No hay una armonía por que los partidos se encargan precisamente de eso, de “partir”, que es sinónimo de dividir a la sociedad civil y a los políticos “representantes” en partes o camarillas discordantes.

Tan perfectos han sido los planes de los intrusos, que hoy el pueblo mexicano sigue sin la autoridad soberana que predica el artículo 39 constitucional, arrodillado, acorralado, maniatado, dividido, controlado y a merced de los dueños de los partidos políticos, de

los sindicatos, de las agrupaciones campesinas, abatido por los efectos de una terrible globalización, creyendo ingenuamente que tienen una gran autoridad soberana sobre lo que pasa en el país, ignorando que en verdad están perfectamente aislados y sin ninguna posibilidad de mantener algún tipo de unidad o de dominio sobre la situación que guardan las cosas que hacen los sirvientes.

El poder de autoridad o soberanía del pueblo es uno solo, y por ser único no se subdivide, este solo se entrega para que lo ejerza a la situación jurídica llamada “Estado”, es decir, el pueblo no puede transferir lo que no tiene en tres diversas oportunidades o modalidades, esto es, no posee tres poderes sino uno solo, no se hace necesario en lo sucesivo realizar una elección particular para cada tipo de atribución o facultad.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Eliminar la falsa separación de poderes, recobrando la unidad y eludiendo la diversidad ficticia de funciones en el ejercicio del gobierno, se establecerá una sola situación jurídica de “Autoridad Estado”, eludiendo la práctica engañosa de la subdivisión de “poderes”, en el entendido de que las funciones, o facultades, tareas o encomiendas no son poderes, sino simplemente una diversidad de atribuciones del Estado, que por nada pueden ser poderes diversos.

### **3.- Rota la regla de la integralidad:**

Aquí examinaremos el grado de afectación a la sociedad civil por la toma de decisiones de los políticos sirvientes: La regla de la integralidad establece, por lo tanto, que: En todo organismo político, el órgano rector necesita disponer de un poder de decisión de última instancia sobre la integralidad de aquellas cuestiones que tienen, o pueden tener, una importancia vital para la existencia o el desarrollo del organismo.

Debe tenerse presente que tanto el “*estatismo*” como el “*privatismo*” violan esta regla, el primero, porque obliga al Estado a asumir funciones que, en realidad, no necesariamente le competen; el segundo porque le niega al Estado el Poder de decidir en última instancia sobre cuestiones vitales para la comunidad.

El Estado debe tener, una capacidad de respuesta integral a los problemas esenciales que hacen a la vida de una Nación y debe hacerla valer allí en dónde sea necesario. Por eso es que el órgano rector de una unidad política tiene una responsabilidad mucho mayor, imposible de equiparar con la que le cabe a la conducción de los organismos no-políticos. Una decisión tomada por un Jefe de Estado, afecta a toda una Nación (pueblo) y puede llegar a afectar a todas y a cada una de las personas que lo integran. Las consecuencias de las decisiones políticas son, en una muy alta proporción de los casos, integrales; es decir: afectan a toda la vida del organismo político y de la sociedad entera.

En teoría se entiende que el “*político*” queda sometido al cumplimiento del interés general, su voluntad no puede estar en pugna con el de la colectividad, el desvío o exceso del quehacer del sirviente público, no puede invocar razones de interés público; por tanto, si no se satisface este requisito habrá la posibilidad de obtener la ineficiencia y la ineficacia.

El deseo de la sociedad consiste en lograr determinados beneficios comunes (interés público), acciones tendientes a la consecución de un bien para la humanidad, en cambio, el incumplimiento conlleva perjurio (*perfidia, traición, mentira, falsedad*) al juramento ofrecido al momento de rendir protesta y en el que se pone como testigo a los presentes de que el honor y la palabra del sirviente público quedan en prenda del buen cumplimiento de la encomienda.

No es admisible que los “*políticos intrusos*” hayan comprometido la estabilidad, las capacidades y la integralidad del Estado mexicano. Una simple protesta de ley a mano alzada no basta como prenda de que habrán de cumplir la encomienda; se requiere de algo más efectivo, de una transformación profunda a las tesis que por muchos años han demostrado su ineficacia e ilegitimidad; pero lo más importante como lo dispone el artículo 128 de la Constitución de 1857, se necesita primero restablecer el orden constitucional de la república, juzgar a los intrusos y a sus cómplices, con arreglo a las leyes que en su virtud se hubieren expedido.

A fin de coordinar, deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan el servicio público que está instituido para beneficio del pueblo, el Estado como órgano-institución de un solo poder, tomará decisiones de forma colegiada, esto es, que la toma de acuerdos sobre cualquier asunto de su competencia público o privado, sucederá de forma democrática por consenso unanimidad o mayoría, de la pluralidad de personas o representantes de las entidades públicas.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Establecer que los empleados públicos para resolver de forma organizada toda cuestión vital para la comunidad sean estas públicas o privadas, deberán estar accesibles las 24 horas del día los 365 días del año, actuando en cada caso de forma inmediata aún y cuando el asunto no fuese de su responsabilidad directa, debiendo convertirse automáticamente en gestores oficiosos del asunto de que se trate, ante el organismo colegiado de toma de decisiones del Estado.

#### **4.- Rota la regla de la concentración:**

Al haber vacío político que diluye el poder de mando de los mandatarios, el Estado no dispone de una capacidad de respuesta integral, forzosamente debemos concluir que: (A) se halla limitado en cuanto a su Poder, y, (B) se halla imposibilitado de cumplir con la totalidad de sus funciones.



La regla de la “*concentración del poder*” establece que: La actividad política plena requiere la disposición plena del poder político. En la medida en que el poder político se halle restringido o condicionado, la actividad política se verá impedida de desarrollarse plenamente. El Estado tiene que cumplir con las funciones de conducción, síntesis y previsión que lo legitiman. Pero, para poder cumplir cabalmente con estas funciones, no debe tener *a priori* denegado el acceso a los niveles de decisión que hacen a las cuestiones vitales para el organismo político; y, finalmente, para que estas decisiones sean realmente soberanas y completamente responsables, su poder no debe estar coartado por compromisos, trabas o impedimentos, por ejemplo, en materia económica tenemos que se le haga imposible actuar en beneficio de la integralidad del conjunto social. – por ejemplo en materia política tenemos que el centro verdadero del poder no es como se concibe en el “*código político*”, tal poder o autoridad del pueblo se ha degenerado peligrosamente desplazándose hacia la voluntad de los partidos, los hechos nos indican que el poder (delegado) tampoco radica en los representantes en virtud de que éstos han permitido que quede segmentado, coartado y disperso pues ya sea por vías formales o informales, el poder político no está concentrado en los servidores públicos, es decir, no hay la deseada integralidad del poder en los nominados por elección popular por el vacío de poder que al efecto generan los dirigentes o dueños de los partidos que propician un fenómeno al que se le llama “partidocracia” y que consiste esencialmente en dos circunstancias.

1.- La substitución de los partidos en el papel del Estado: Sus características son: La pérdida de independencia de los representantes populares; \_ El sacrificio de la capacidad de los representantes en busca de una mayor disciplina de partido; \_ La transferencia de la voluntad popular a la voluntad partidista; \_ La deshumanización de los representantes de elección que se convierten un mero instrumento de votación para los partidos; \_ La devaluación política de la asamblea legislativa; \_ El desarrollo del proceso real de legislación y de acuerdos parlamentarios fuera de los recintos propios para ese efecto; \_ La falta de control real sobre el gobierno; \_ La confusión de los poderes del estado; \_ La pérdida de funciones reales de las cámaras de representantes; \_ El deterioro de la vida política local por la imposición de criterios partidistas; \_ La monopolización de la actividad política que impide la creación y competitividad equilibrada de los partidos en el ejercicio del poder; y, \_ La consolidación monopólica de una administración que impide un pluralismo efectivo.

2.- La desintegración del Estado: Sus características son: Un pluralismo caro y desquiciante, en donde no se logra una coalición mayoritaria, solo un proceso legislativo fragmentado y caótico; \_ La paralización de la acción de gobierno; \_ Un vacío de poder; y, \_ La carencia de un proyecto definido de gobierno. El desplazamiento del poder institucional del Estado hacia los partidos es: La democracia

degenerada en el poder oligárquico (el gobierno de unos pocos) de uno o más dirigentes o dueños de los partidos.

*¿Qué es un Estado Partidocrático?* “El estado partidocrático, es aquél en el que el poder resulta monopolizado, más o menos legítimamente por un partido o por una pluralidad de partidos aliados, lo que da lugar a que éstos, no lo substituyan, ni coadyuven con él en el ejercicio del poder, sino que, al disputárselo lo invalidan y lo descuartizan”.

Bajo las anteriores condiciones, la sociedad civil y los sirvientes mantienen una relación de divorcio pues, el poder no dimana del pueblo, sino del gobierno, éstos (los gobernantes) no se sienten comprometidos con aquellos (los gobernados), prefieren jurarle obediencia incondicional, fidelidad y lealtad absoluta a los dirigentes y dueños de los partidos políticos, ésta relación de fidelidad no desaparece, la voluntad de los ya convertidos en “representantes” sirvientes, sigue sometida a los dictados de unos pocos, manteniéndose así un indebido control sobre la voluntad de los políticos.

Los partidos políticos no son órganos del Estado, tan es así que, como referencia se retoma el sentido de la sentencia número 10/1983 del Tribunal Constitucional Español de fecha 21 de febrero de 1983, que en su parte conducente resuelve lo siguiente: *“Se impide a los partidos invadir la autonomía propia de los representantes del pueblo en los órganos parlamentarios, sin importar que hayan sido sus promotores, pues la investidura popular recae sobre los candidatos, no sobre los partidos que los presentan y éstos no puede privar o sustituir a los electores de su mandato”*; es decir, en el Congreso de la Unión, las facciones parlamentarias no tienen razón de existir; la independencia y autonomía de los representantes con relación a los partidos que los postularon, debe quedar garantizada en la ley.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Impedir que grupos de poder o fuerzas negativas fácticas (no visibles) de cualquier naturaleza interfieran en las labores públicas, en el pensamiento o en la toma de decisiones de los empleados o funcionarios del Estado, es preciso enaltecer la importancia de la independencia de los funcionarios públicos por lo que dado el caso de que algún ciudadano sospecha de la independencia o autonomía de alguno de ellos, deberá acudir ante el órgano superior jerárquico mas próximo a su domicilio para hacerlo saber verbalmente de lo cual se levantará el acta correspondiente, en este caso la institución conocedora abrirá un procedimiento especial sobre el particular, para determinar y sancionar la responsabilidad sobre la injerencia arbitraria del partido, de sus militantes o de tercero extraño sobre la voluntad del servidor público.

## **5.-Rota la regla de la “soberanía”.**

El pueblo de México ha tenido varios gobiernos golpistas, y varios otros intrusos cómplices de los armados de la revolución trunca de 1910, aquellos que fundaron la dictadura del *“partido único dominante”* por más de 70 años, aunado a los gobiernos cómplices más recientes llamados *“del cambio del 2000 y 2006”*, todos ellos carecen del principio de la legitimidad, lo que ha quebrantado el mandato constitucional y provocado la nula vigencia de la autoridad nacional del pueblo sobre los sirvientes políticos.

La *“Soberanía”* del pueblo está íntimamente relacionada con el *“contrato político”* entre gobernantes y gobernados, tan es así que según el artículo 39 del tal *“contrato”* se describe como *“el poder nacional del pueblo”, (poder que no consta configurado en escritura pública)*, poder que en la realidad es una absoluta falsedad ya que habiendo nombrando el pueblo a sus diputados, creará ser todavía el soberano pero se engaña, porque pasada la nominación éste queda esclavo de sus representantes, de este modo en nombre del pueblo soberano los elegidos se hacen absolutamente señores de todo, ellos querrán gozar de más derechos que los de sus amos de la sociedad civil, desplazarán las normas legales, venderán, saquearán, devastarán, asesinarán, tendrán profesores que enseñen sus derechos para gozar de una cultura pública que afiance su libertinaje desmedido, de aquí tienen lugar las revoluciones, los mítines y las matanzas entre gobernantes y gobernados, ¿quién ha de arreglar esas diferencias?, ¿los propios gobernantes?, no pueden ser juez y parte interesada, ¿de qué sirve el contrato político si este no se respeta?, ¿será acaso un contrato de adhesión a una fantasía?, o, si es verdadero, ¿en qué momento les toca a los nuevos ciudadanos expresar su conformidad o inconformidad con él?.

En teoría se entiende que un pueblo *“soberano”* está en posesión de una omnipotencia social: Todos los derechos son suyos; de lo contrario no sería omnipotente; y no siendo omnipotente no sería soberano. Por la misma razón todas las obligaciones están fuera de él; porque si el tuviera alguna obligación que cumplir, sería súbdito: soberano es el que manda, súbdito el que obedece; soberano es el que tiene derechos, súbdito el que tiene obligaciones. Así el principio de la soberanía popular, que es un principio ateo, es también un principio tiránico, por que dónde hay un súbdito y no tiene derechos, y un soberano que no tiene obligaciones, hay tiranía.

El ser humano en contacto con los demás hombres (*relaciones generacionales históricas*), tuvo la necesidad de la *“igualdad”*, y por consiguiente la de derechos recíprocos y limitados: entonces sintió la necesidad de una regla que presidiera a su reciprocidad y a su limitación: esta regla es la justicia.

Ahora bien, el principio de la soberanía popular no reconoce reciprocidad en los derechos ni limitación en las obligaciones. La idea de justo desaparece donde hay señores y esclavos: de aquí resulta que el principio de la soberanía siendo ateo y

tiránico, es también un principio inmoral, por que destruye la justicia. Es tan cierto que la justicia y la soberanía popular no pueden coexistir en el mundo, que reconocida la existencia de la primera, queda aniquilada la segunda, porque si el pueblo solo puede hacer lo que la justicia le exija, el pueblo es súbdito y la justicia es soberana, ante esta verdad, la soberanía del pueblo es un absurdo.

Si la soberanía reside en la voluntad general, y la voluntad general es la colección de las voluntades particulares, todos los individuos deben tener una parte de poder soberano: si el poder soberano no se realiza sino por medio de las leyes, todos los individuos aún los menores de edad deben tener una parte activa en la confección de las leyes.

Los ignorantes por ejemplo, tienen los mismos derechos que los sabios, porque tienen una voluntad como ellos: las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, porque tienen una voluntad como ellos: los niños tienen los mismos derechos que los padres, porque tienen una voluntad como ellos: los proletarios tienen los mismos derechos que los poderosos, porque tiene una voluntad como ellos: en fin, los dementes deben reclamar una parte de su soberanía, porque al negarles el cielo la razón, no los despojo de la voluntad, y la voluntad les hace soberanos también.

Las constituciones políticas, no han de ser jamás la expresión de la razón ni de la expresión de la voluntad general: Por ejemplo: Todos los congresistas están en un foro: la voluntad se ha verificado ya: su resultado es, que por la mitad más uno de todas las voluntades ha sido aprobada una ley.

Según la teoría de la soberanía popular, esa ley no obliga sino a los que la han votado: la voluntad es inenajenable, porque su enajenación sería un suicidio: una voluntad que se somete a otra voluntad se enajena (se vende), y enajenada se aniquila. ¿Qué es entonces la soberanía del pueblo?; según la constitución política actual, es un absurdo, un imposible. Lo cierto es que concluida la etapa de una elección, el candidato congresista electo se va con su voluntad, y tiene la posibilidad de hacer con ella lo que le parezca sin contar con el consentimiento de quien lo eligió, en cambio el elector se queda con la suya sin saber que fue engañado. Nada más ridículo que reconocer en el pueblo un poder que ni es capaz de concebir, le es imposible discernir y mucho menos aplicar.

Si la soberanía del pueblo es un error, todas las constituciones políticas del mundo son impotentes para cambiar esta circunstancia; pero si es una verdad, no se necesita de leyes constitucionales para sostenerse.

**LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN:** Afianzar la soberanía o autoridad de la gente (del pueblo), solo basta que el ciudadano que se vea afectado por un acto de un sirviente público de cualquier nivel, acuda ante el organismo jerárquico más próximo a su

domicilio, a tramitar un procedimiento de revocación de contrato de facultades, concluido el cual y habiendo causa legal justificada, sin demora será separado de su encargo, debiendo llamar al siguiente en la lista de prelación existente.

## **6.-Rota la regla de la perseverancia de la forma de gobierno:**

Por hacer un esquema realista diré que existen dos tipos de sistemas o formas de gobierno: “*el socialista*” y “*el capitalista*”, lo que se conoce como régimen de “*izquierda*” y de “*derecha*” respectivamente.

El artículo 40 del “*contrato-mandato político constitucional*” establece para el pueblo mexicano un sistema de carácter democrático, aquel que es relativo al cuidado de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las “*clases populares*”. Popular como sinónimo de la gente común, pública, ordinaria, genérica, universal o general de una nación. Para identificar el tipo que comprende las clases “*populares*” diremos que se trata de la gente de las clases obrera, campesina y urbana, (*las que viven de su fuerza de trabajo*), lo contrario de las clases “*selectas*,” (*las que viven del capital*).

Las asociaciones políticas, (*partidos*) tratan de convencernos de que sus candidatos habrán de ubicar su actuación al tenor de la forma prescrita en el contrato constitucional pero, en verdad no es así, para comprobarlo basta ver las estadísticas sociales, políticas, económicas y culturales que guardan las referidas clases populares. Un régimen democrático supone un régimen de tipo socialista, no obstante, si es que establecido (convenido) está que los servidores públicos deben actuar bajo los lineamientos del contrato político del artículo 40 referido, entonces: ¿Por qué los nuevos intrusos del llamado “*cambio del 2000 y 2006*” actúan en formas afines al régimen “*capitalista*”? el que se distingue por mirar por los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las “*clases selectas*”, es decir, está comprobado que los socialistas de izquierda en México ya no gobiernan, y que hoy gobiernan los que impulsan la forma capitalista. ¿*Dónde quedó la regla de la constancia en la forma democrática de gobierno?*, aquella que se refiere a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las clases populares.

Aquí tenemos un conflicto que supone la ausencia de la perseverancia, tenacidad, fidelidad y persistencia de la forma de gobierno convenida en el artículo 40 del contrato constitucional. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué entró en vigencia otra forma de gobierno diferente?, ¿por qué los electores siguen engañados y convertidos en soldados de una guerra artificial?, ¿qué pelean los electores de las clases populares?, en todo caso, si los electores pretenden que se instale una forma de gobierno capitalista, ¿qué acaso no debe quedar convenido así por las mayorías?, entonces, ¿habrá que reformar el artículo 40 para darle legitimidad a la forma de gobierno capitalista como la que se ha instalado más recientemente?, ¿cuándo sucederá esto?.

Así las cosas y peor aún, al no haber orden, certeza y legalidad en las reglas del mandato, no puede haber seguridad en la salvaguarda de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales de las clases populares, entonces, si en la dirección del país solo hay territorio y población, pero no hay un gobierno representativo del pueblo, queda irremediablemente abatida la naturaleza que le da un sustento y equilibrio a la vida de una comunidad.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Establecer con claridad en el artículo 40 constitucional, si la forma de gobierno, forma de estado o forma de sistema político por la que se rige nuestro país, es bajo alguno de los sistemas en particular: capitalista, socialista, comunista, parlamentarista, imperialista, monárquico o de otra naturaleza, precisando desde luego sus características, de manera tal que no quede al arbitrio de los gobernantes en turno implantar el que sea de su mayor agrado o conveniencia.

## **7.-Rota la regla de la legitimidad:**

La legitimidad, consiste en el no cumplimiento con las funciones del Estado en franco desacato al mandato constitucional y al carácter obligatorio de la función pública.

No obstante los mandamientos del *“contrato-político”* y de las leyes que de él emanan, los *“representantes”* populares paulatinamente han desatendido cumplir con lo convenido, descuidando brindarle bienestar a las clases populares, (la obrera, la campesina y la urbana) por el contrario, mantienen oídos sordos y por acción u omisión, se han venido apartando de procurarle calidad y eficacia a la organización del cumplimiento de sus respectivas actividades.

Las diversas representaciones populares de gobierno, llámense nacionales estatales y municipales, aún las más recientemente llamadas *“del cambio 2000 y 2006”*, han ignorado consagrar el desarrollo de las facultades del ser humano, poner en práctica el amor a la patria, la conciencia de solidaridad basada en la independencia y en la justicia, la lucha contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos y los prejuicios, bajo un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social, político y cultural, comprender los problemas, defender la independencia política de su nivel de gobierno, incrementar la cultura bajo una mejor convivencia humana, guardar aprecio a la dignidad de las personas y la integridad de las familias, inspirándose en ideales de fraternidad y justicia, brindarle orden y racionalidad a la ciudad conforme a los planes y programas para el desarrollo urbano de manera tal que ésta, represente un lugar con expectativas de bienestar.

Se ha incumplido con al deber de garantizar la libertad, la seguridad, tranquilidad, moralidad y el orden. Han invalidado el desarrollo equilibrado de los programas de salud, higiene y ecología y cometido desacato al deber de tutelar, proteger, conducir, ayudar, gestionar y procurar el bien común; en ocasión de esta iniciativa tan solo

referiré aquellos que están en contravención con los artículos del “*contrato político*”, también de aquello relativo a la exigencia de orientar el gasto público a la atención de obras y servicios de mayor beneficio colectivo, aquellas que se distinguen por ser elementales y prioritarias para asegurar la sobrevivencia de una comunidad de personas.

Los desencuentros con lo ordenado en el contrato de mandato son muchos, pero en este espacio tan solo se mencionarán algunos que no se cumplen como: *El Asegurar la equidad en los procesos productivos y distributivos; \_ orientar correctamente el gasto público; y \_ descentralizar la atención de los servicios públicos*. *La omisión en la construcción, equipamiento y operación de Mercados públicos; \_ centros de abasto. \_ obras de apoyo a la producción y a la comercialización; \_ limpieza de la vía pública; \_ tratamiento de aguas residuales; y, \_ parques recreativos*. Servicios que no existen en muchas cabeceras ni en comunidades. Se ha descuidado brindarle calidad y eficiencia a la organización y funcionamiento de los servicios de: \_ “*Agua potable; \_ calles; \_ drenaje; \_ alcantarillado; \_ recolección, \_ tratamiento y disposición final de la basura; \_ panteones; rastro; \_ jardines; \_ seguridad pública; \_ tránsito; \_ educación; y \_ salud.*” Servicios que no se dan a toda la población en general, que son parciales y deficientes y que no se adaptan a las necesidades de la mayoría de las comunidades.

Se ha desatendido hacer uso de la facultad de “*corresponsabilidad*” entre los diversos órganos de gobierno, en franco desacato a las reglas constitucionales. Se puede considerar que es contra el orden público que las representaciones que resultan de los diversos partidos, al ejercer el gobierno en las distintas jurisdicciones y jerarquías, incumplen su deber de corresponsabilidad, es decir, no cooperan entre sí, por el contrario, difieren con los demás de otros partidos y tienden a enfrentarse con mayor rigor a como lo hicieron antes en las campañas electorales, no se les olvida que fueron y siguen siendo adversarios de ideas y, generalmente utilizan de su autoridad para fracturarse y entorpecer sus respectivas atribuciones.

Lo anterior supone una conjunción de dos elementos pues, además del “interés jurídico”, es un “deber jurídico” el de desempeñar los cargos públicos de elección; por tanto, al existir derecho subjetivo (*interés jurídico, facultad o potestad*) dada por un orden jurídico objetivo (*legislación*) también regula la actuación particular del individuo imponiendo el elemento coercitivo, es decir, existe un poder de exigencia imperativo (*de obligatoriedad*) en base a un interés público en el que un cargo de elección popular es para el benéfico de la colectividad.

La omisión de facultades implica desobediencia al carácter obligatorio del de la función pública de los cargos de elección popular directa o indirecta lo que redundo en perjuicio del párrafo cuarto del artículo 5º del contrato-mandato constitución, que a la letra dice: “*En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios, en los términos de las*

*leyes respectivas,.... El desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular directa o indirecta”.*

Rafael I. Martínez Morales en su obra “Diccionario Jurídico Temático 3 de Derecho Administrativo” dice: “... *el interés público es una limitante de la libertad individual, a efecto de que no se cause un perjuicio a la colectividad, de ahí que, es necesario el carácter obligatorio de la función pública para la realización de un fin común. La voluntad del representante de elección queda sometida al cumplimiento del interés general, y no puede estar en pugna el interés particular del servidor público, con el de la colectividad. El desvío o exceso del poder de la autoridad, no puede invocar razones de interés público; por tanto, si no se satisfacen éstos requisitos habrá la posibilidad de obtener la ineficiencia*”.

El incumplimiento de facultades de los “*servidores público*” en todo caso, conlleva perjurio, perfidia, traición, mentira y falsedad al juramento exigido en la Constitución. Este juramento tiene un valor esencial, dado que aquel que rinde la protesta, está prometiendo y poniendo de testigos a Dios y a los presentes de que por su honor y su palabra dan la prenda que habrá de cumplir su encomienda. Lamentablemente con o sin juramento podemos concluir que, a los que conocemos como “*políticos usurpadores*” no les favorece la esencia de ser diestros en el arte de la conducción del gobierno, ni haber puesto las instituciones del Estado al servicio del pueblo. En virtud de que los cargos públicos de elección directa o indirecta son obligatorios, todo incumplimiento implicará responsabilidad patrimonial de los sirvientes responsables.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Tan pronto la instancia jerárquica superior haya resuelto el procedimiento contra un funcionario público para la separación de su cargo, el Estado de inmediato ejercitará la acción correspondiente de responsabilidad patrimonial y judicial que le resulte contra el ex funcionario de que se trate, por el o los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que siendo apreciables en dinero se le hubieren ocasionado a aquél.

## **8.-Rota la regla del orden público:**

El orden público tiene por objeto la protección legal de los intereses, de la moralidad, de las costumbres, de la seguridad de la sociedad civil en cambio, se han venido sucediendo acciones y omisiones de los “*políticos sirvientes*”, las que faltan al cumplimiento de sus obligaciones por salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del servicio, lo que propicia un desorden a la tranquilidad y el sosiego en perjuicio del interés general.

Es contra la moralidad, las buenas costumbres que los “*políticos sirvientes*” cometen violencia en contra de las disposiciones de orden público pues, desatienden la mayoría de las prohibiciones que se encuentran establecidas en la Ley de Responsabilidad de



Servidores Públicos, aquella que se creó como un cerco para limitarles su irregular comportamiento.

Sobre el Título Cuarto del mandato constitucional, relativo a las “responsabilidades”, resulta nula la eficacia del *“Sistema de Medios de Control estipulado en el contrato para Regular el comportamiento de los Servidores Públicos”*, se ha comprobado que no son eficaces las instituciones y procedimientos encargados de aplicar el *“Sistema de Medios de Control de los Servidores Públicos”*, aquel que fue creado para contener el irregular comportamiento de los servidores públicos; las instancias, las leyes, el juicio político, el de responsabilidades, el de desafuero, el de amparo, el juicio administrativo, civil o el penal; ellos los políticos, son asociados (*socios de interés*) de tal manera que, los medios de control legal están al mando de la misma membresía, (*hermandad*) de otros asociados y así todos confabulados, tienen asegurada la dispensa (*impunidad*) de sus infracciones.

La corrupción y la impunidad proveniente de los representantes, aquella cometida por acciones u omisiones, se debe al descuido derivado del paulatino relajamiento de los superiores jerárquicos encargados de supervisar el cumplimiento de facultades de los subordinados, y su complicidad en al omitir su obligación (deber) de denunciar y castigar severamente y de manera ejemplar tales conductas indebidas, lo que supone la hipótesis de presunta delincuencia pública organizada.

Los sirvientes (*los políticos*), han dejado de atender los principios la honradez, la lealtad, la eficiencia en el servicio como principios rectores e la función pública, han propiciado un ambiente de corrupción, autoritarismo, desvío de poder, ultrajes a las instituciones y la forma de gobierno, lo que necesariamente acarrea responsabilidad y desorden público.

Perdida la rectoría del desarrollo nacional irremediablemente queda desvanecida la soberanía y su régimen democrático, se estanca el fortalecimiento del desarrollo del crecimiento económico, el empleo, la justa distribución del ingreso y la riqueza, se cuarta la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad debiera estar protegida.

El desarrollo nacional ya no se funda en el principio de responsabilidad social, queda menoscabadas las formas de actividad económica que contribuyen al desarrollo nacional, el estado deja de conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, y de regular el fomento a las actividades que demandan el interés general cambiando el marco de libertad por el de la opresión de las clases populares para abrirle paso a las clases selectas.

LA REPARACION CONSISTIRÁ EN: Para eludir cualquier posible desorden público con carácter de rebelión armada, y si tomamos en cuenta que son las armas el

elemento vinculatorio de una hipotética desestabilización social, mismas que nos pueden conducir al caos generalizado, se impone que su resguardo y custodia quede en lo sucesivo, a cargo de las Contralorías de cada Estado en vez de las fuerzas armadas y del orden, almacenadas en contenedores especialmente dispuestos y bajo el resguardados efectivo, para el efecto en lugares seguros. Se prohibirá todo permiso de posesión o portación de armas en todos los estados de la República, lo cual modifica lo dispuesto en el artículo 10 constitucional, y en su lugar, para la legítima defensa del domicilio de los ciudadanos, éstos recurrirán a otros medios científicos y tecnológicos diversos. La institución policial de la guardia nacional para el cumplimiento de sus funciones de captura, solo podrá hacer uso de sus destrezas físicas personales, o de cualquier otro medio científico o tecnológico apropiado.

### **9.-Rota la regla de la seguridad jurídica:**

Con el fin de que la persona, la familia, las posesiones, los bienes y derechos de los gobernados encuentren *“protección”* ante injerencias arbitrarias por parte de los gobernantes, se establecieron salvaguardas para la correcta aplicación de la ley que se llaman *“garantías de seguridad”*, son fianzas (certezas) (palabras de honor) que dan los gobernantes de procurar que los civiles no caigan en estado de indefensión o la incertidumbre jurídica, haciéndole en todo posible la igualdad y la libertad.

Son derechos públicos los *“reclamos”* de los civiles que se hacen valer frente a los gobernantes cuándo éstos no cumplen sus deberes.

Es el hecho mismo de que las autoridades se subordinen a la estabilidad que demandan las reglas establecidas en la ley, en cambio su actuación degenera en condiciones de indefensión, desigualdad y de afectaciones de las libertades civiles.

Ejemplos del *“estado de indefensión civil”* tenemos algunos como los siguientes: Artículo 8º constitucional.- Al *“derecho de petición”* que debe tener una respuesta en breve término, ante él se obtiene la cerrazón de la autoridad y hasta en el más mínimo reclamo se hace uso de la fuerza pública. Artículo 14 constitucional.- Al *“derecho de audiencia”* que consiste en primero ser escuchado, se obtiene la prisión preventiva, el embargo precautorio, el arraigo, el ilegal libre arbitrio del juzgador en materia civil, etc. Artículo 16 constitucional.- Al *“derecho de autoridad competente”* le viene en contraprestación actos de molestia contra el particular de cualquier autoridad y detenciones hasta sin orden judicial. Artículo 17 constitucional.- Al derecho de *“expedita y eficaz administración de justicia”* recibimos el infamante despotismo, la corrupción y la arbitrariedad del aparato judicial. Artículo 21 al derecho de que *“el Ministerio Público investigue y persiga los delitos”* vemos en las estadísticas que, en 8 de cada 10 delitos no sucede así.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Se propone la creación de un Organismo Supervisor de la Seguridad Jurídica, que se encargue de vigilar permanentemente (diario) el cumplimiento de las facultades conferidas en la ley a los servidores públicos, sin necesidad de que hubiese mediado queja en contrario. La seguridad jurídica de que las disposiciones de la ley se cumplan, estará a cargo de un organismo equivalente a un capataz de obra, quién supervisará que los funcionarios no se relajen paulatinamente en sus tiempos y responsabilidades para los que fueron contratados.

#### **10.-Rota la regla del equilibrio social de clases:**

El propósito esencial de la existencia del Estado, del contrato de mandato, y de las autoridades, consiste en concretar un equilibrio social de las diferencias que surgen entre la clase popular y la selecta.

Efectivamente, a través de los planes o programas de los políticos, “los expertos en el arte de gobernar y las tareas del Estado”, las garantías o derechos sociales contenidos en la constitución, les obliga a preservar el “*equilibrio*” a una clase social y económicamente inferior y a sus integrantes, ya no frente al Estado y sus autoridades, sino ante la clase social pudiente.

Me refiero a los artículos constitucionales 3º de educación; 4º párrafos tercero, cuarto y quinto de salud, medio ambiente adecuado y vivienda; 21 párrafos quinto y sexto de la seguridad pública; 27 de la propiedad, bienes nacionales y el agro mexicano; y 123 de los trabajadores y la seguridad social del proletariado.

Ahora bien, en los hechos tenemos que la educación que imparte el Estado, no tiene un equilibrio de calidad igual, o al menos semejante a la que reciben las personas de la clase selecta, lo mismo sucede en materia de salud, medio ambiente, vivienda, seguridad pública, propiedad, bienes, agricultura, trabajo y seguridad social.

A pesar de lo que digan los sirvientes, quienes por cierto han cobrado muy bien por no hacer nada, aún existe una clara diferenciación que nos indica visiblemente que no hay tal “*equilibrio*” (igualdad, mismo nivel).

LA REPARACION CONSISTIRÁ EN: Evitar que se ahonden las diferencias entre las clases sociales, por lo tanto el Estado deberá encargarse de suministrar sin costo las tres necesidades básicas generadoras del desequilibrio social y que son las de alimento, vestido y vivienda, lo cual permitirá mantener un saludable equilibrio. Se visualiza un Estado agricultor, maquilador y constructor.

#### **11.-Rota la regla de la igualdad en la inclusión de todos los individuos en el proyecto democrático nacional:**

La Constitución legítima de 1857 previene en su artículo 35 lo que textualmente dice: *“Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares. II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley establezca”*.

Así, entendemos que la Constitución que está por encima de las leyes secundarias que dispone en su artículo 35 fracción II, que los ciudadanos tienen la potestad o prerrogativa (*derecho reconocido por la ley*) no tan solo de votar (*Derecho Activo, de actuar, de dar un voto*), sino también de ser votados (*Derecho Pasivo de recibir votos*), no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce como derecho subjetivo; esta facultad es propia de las personas, (*de los seres humanos*) es decir, el interés jurídico es de los individuos (*del hombre en sociedad*), compete al patrimonio de sus bienes jurídicos, es parte de sus derechos políticos como ser humano en sociedad.

Para ejercer esta prerrogativa la ley le es facultativa no limitativa, es decir, no obliga a los ciudadanos a tener alguna membresía o ser patrocinado por alguna Asociación Política como requisito para ser candidato a un cargo de elección directa o indirecta, por el contrario, el legislador contempló también la hipótesis legal para los casos de los candidatos, formulas o planillas sin registro.

Sobre la *“democratización de la democracia”*, y la nula igualdad de oportunidades en la recaudación de derechos políticos electorales de los ciudadanos independientes de partidos, podemos decir que, si trataremos de esclarecer el sentido de la visión que el legislador puso en las leyes de los intrusos, como es el caso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en su Título II Capítulo Quinto del Artículo 205 fracción 2 inciso j, respecto del contenido de las boletas electorales dice: El Artículo 205 (Reformado, D. O. 24 de septiembre de 1993): Fracción 2 decía: *Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán: (ADICIONADO, Diario Oficial de 22 DE NOVIEMBRE DE 1996) j) Espacio para candidatos o fórmulas no registradas.*

La inclusión del texto *“espacio en las boletas electorales”* nos da la idea de que en verdad los ciudadanos comunes y corrientes pueden ser candidatos no registrados, pueden participar en un proceso de elección, aún y cuando éstos no estén patrocinados por algún partido, dejando abierta la posibilidad de poder sostener legalmente una candidatura sin registro, es decir, independiente.

El artículo 279 fracciones I de la propia ley del LGIPE permite al elector anotar en la boleta el nombre del candidato no registrado o el que desea emitir su voto.

Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes: (REFORMADO, Diario Oficial de 22 DE NOVIEMBRE DE 1996) inciso c) *Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.*

Examinada la pugna entre los gobernantes y los intrusos del Estado por reconocer el “*Principio de Igualdad de Oportunidades*” en el ejercicio y recaudación de los derechos político electorales a favor de los ciudadanos independientes de partidos políticos está a la orden del día, pues, una de las desdichas de éste país (México) ha sido precisamente el error de confiarse de esa engañosa y falsa “*facultad concurrente*” por la incredulidad de las personas (civiles) en permitir que los “*corredores de los partidos*” anden por delante en nuestro camino comerciando y negociando nuestros bienes jurídicos, aquellos que son herencia y patrimonio legado por nuestros ancestros.

La “*facultad concurrente*” a que se refiere la teoría de los artículos 35 fracciones I y II y 36 fracción III de la Constitución, – es un derecho y una obligación- por ende, el ciudadano se encuentra facultado y obligado para acudir a un proceso electoral, pero tales disposiciones son omisas en decir si se puede acudir asistido por algún partido, pues tiene a su favor también, el legítimo derecho para tener divergencia o rivalidad respecto de las fórmulas políticas que se le ofrecen, y por ende estar en libertad de optar mejor por competir, rivalizar, o contender en la justa electoral eludiendo, cualquier apoyo o patrocinio de intermediarios.

Se trata de garantizarle a todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que no pertenecen a una Asociación Política o “*partido*”, la concesión como prerrogativa del principio rector de “*igualdad*”, pero, no la igualdad en lo referente a la equidad de género, ni mucho menos la igualdad de oportunidades por razón de su sexo, sino de aquella que es necesaria para hacer realidad el proceso democrático en materia electoral, es decir, la que hace necesario legislar para hacer realidad 3 principio como son: 1.- El principio de igualdad en la votación; 2.- El principio de igualdad en la participación efectiva (*segura, verdadera, real*) y, 3.- El principio de igualdad en la inclusión de todos los individuos en el proyecto democrático.

La concesión del principio de “*igualdad*”, para tener “seguridad jurídica” de que en nuestra calidad de ciudadanos comunes y corrientes estamos siendo convocados a un proceso de elección comicial, ya que tenemos derecho a recibir en igualdad de condiciones y oportunidades frente a los candidatos de los partidos, para tener la seguridad jurídica de que se reconocerá como valido cualquier sufragio emitido por el elector a favor de los candidatos no registrados.

La concesión del “*principio de igualdad de participación*” en la inclusión de todos los individuos en el proyecto democrático, para tener la seguridad jurídica de que los ciudadanos pueden individual y libremente promover su propia candidatura a cargos de elección popular sin la necesidad del patrocinio de algún partido. Lamentablemente en muchas elecciones municipales, locales y recientemente nacionales varios ciudadanos

han propuesto su candidatura bajo estos lineamientos legales, con la determinación negativa de los intrusos de la Suprema Corte de admitir tal figura electiva.

Lo que se pretende lograr, en todo caso, es garantizarle a los integrantes de la sociedad civil en general, la “seguridad jurídica” del ejercicio de sus derechos políticos electorales, a todos aquellos ciudadanos que individual y libremente hayan optado por no afiliarse ni ser patrocinados por algún partido político, ante el acontecimiento de los procesos comiciales, y que mejor prefirieren promover su candidatura sin registro y sin la intermediación o patrocinio de algún partido.

Según la legislación los “*partidos*” políticos son entidades de interés público y tienen derecho a participar en las elecciones constitucionales de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de Ayuntamientos... Ese derecho como su propia palabra lo indica, se limita a una simple “*participación*” ó (*colaboración, intervención, adhesión*), colaboran, contribuyen, cooperan, pero en nada se asemeja con el derecho de los ciudadanos a participar directamente en el ejercicio de sus derechos políticos como personas o individuo en sociedad.

Máx. Weber, en su libro “*Economía y Sociedad*” dice: “*Los partidos políticos son sólo un medio para hacer efectivo el principio democrático, no son la única vía para ello, ni pueden sustituir la intervención directa de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos.*”.

Luego, como “*medio*”, (manera, procedimiento, forma), pero no son la única vía en la concreción del principio democrático por el que se accede al poder. Entonces, ¿cuál será pues la otra vía? La respuesta es, sin lugar a duda, las candidaturas sin registro y sin partido.

En México, según la Suprema Corte de los intrusos, un ciudadano particular, independiente de partidos, no tiene derecho para recibir una “*voluntad*” electoral que, en todo caso, legalmente forma parte del patrimonio de sus bienes jurídicos protegidos, pues se trata de una decisión libre de otro individuo en sociedad emitida a su favor a través de una manifestación unilateral de voluntad, misma que está representada en un sufragio (*voto*) y que se materializa con el depósito de las boletas electorales en las urnas el día de los comicios electorales, lo que en este país sencillamente no existe para una persona común.

Como una vieja convicción hemos tenido un “*Régimen de Sistema de Partidos*”, ideado por lo intrusos como medio para lograr el principio democrático; así, y pasado el tiempo, bajo la rectoría de este “sistema” se hace necesario hacer una pausa para reflexionar que tanto hemos aprendido de él, y si es importante afrontarlo. También, y para planear el futuro es necesario saber cuáles y cuantos son los errores que se han cometido en el pasado bajo ese “sistema”, por lo que se hace necesario examinas que

tanto es importante que la Sociedad Civil integrada por ciudadanos, tengan la misma posibilidad en condiciones de igualdad de ser beneficiaria del reconocimiento de la validez de los votos emitidos a su favor cuando el elector haya optado por marcar las boletas electorales en el espacio destinado para candidatos, fórmulas o planillas no registradas.

Está bien claro que, si solo convocarse a los partidos políticos a un proceso comicial, se pierde el sustento del sentido de la convocatoria pues, se convoca a quienes no son titulares de ninguna prerrogativa esencial, fundamental, básica, o necesaria como ingrediente principal que nos dé la certeza jurídica de que verdaderamente se está haciendo del conocimiento de los legítimos y posibles interesados en ejercer su derecho, sino que, por el contrario, se hace la cita, el llamado o el edicto correspondiente, a quienes no ostentan derechos políticos para recibir votos, pues los beneficiarios son los candidatos (personas físicas) no los partidos (personas jurídicas o morales) que en realidad son meros intermediarios, negociantes, traficantes con facultades meramente de apoyo, de colaboración (contribuir, ayudar, auxiliar, cooperar) como su etimología lo indica del término “COLABORAR” proviene de “COL” prefijo de “cola” : de “cola-rabo”, o parte final o trasera de algo o de alguien; y “LABORAR”, labrar, trabajar para algo o para alguien. *¿Qué sentido tiene convocar mejor a los ayudantes, a los apéndices, a los interlocutores, mediadores, mercaderes o árbitros tratantes de los asuntos para lo que solo incumben a los ciudadanos como personas titulares del derecho?*

Así las cosas, los partidos y sus candidatos mantienen una relación de divorcio con la mayoría de la Sociedad Civil, no encontramos ante una crisis de participación que origina una crisis de legitimidad que nos arroja como resultado representaciones populares electas por simples minorías.

Jorge Vera Estañol, en su libro, “Al margen de la Constitución de 1917”; dice: *“Cuando la opinión pública no se manifiesta en los comicios; más que esto, deja de hacer oír su voz en todos los momentos con relación a todos los actos importantes de la administración, la comunidad de ideas entre el pueblo y sus representantes insensiblemente va desvaneciéndose, las fuerzas que mantienen los lazos de dependencia y responsabilidad, se relajan paulatinamente; y si el silencio se prolonga el gobierno acaba por sentirse independiente, irresponsable, infalible, omnipotente. La democracia resulta entonces una quimera; (un sueño, una ilusión) la autocracia (tiranía-dictadura) vestida con falsos ropajes, en la realidad: El gobierno es amo y no servidor; hace los comicios, en vez de que los comicios hagan el gobierno”.*

La crisis de participación en los procesos electorales refleja el desencanto de la Sociedad Civil respecto del “Régimen del Sistema de Partidos” y también nos da una prueba bien clara de que éste se encuentra en la fase final de su decadencia, pues

según resultados que arrojan las elecciones próximas pasadas, en el país existe una población general de 105 millones de habitantes, de los que 80 millones de ciudadanos no votan por que no tienen credencial o no acuden a emitir su sufragio el día de las elecciones. El resto, 25 millones si votan, pero lo hacen de manera diferenciada dividiendo su sufragio entre los diferentes partidos que existen. De lo anterior podemos concluir, que el triunfador en un proceso de elección es el abstencionismo.

Para calificar el esfuerzo que hacen los partidos más pequeños cuando participan en los procesos electorales, resultan críticas muy serias en las que cualquier voto a su favor se le ha dado en llamar “*votación inútil*” o elección inútil. Se ha podido comprobar que el interés de estos partidos es artificial pues su única labor consiste en trabajar hasta donde pueden lograr sostener el nivel de votación requerido por la ley, que les alcance para conservar su registro y los beneficios del presupuesto público.

La votación “*diferenciada*” (dividida) pone de manifiesto la división de la Sociedad Civil que se deja seducir por tal o cual partido, es el caso que después de un proceso de elección dividido, los electores cosechan rencores y frustraciones muchas veces insuperables que dan lugar al fenómeno al que se le ha dado en llamar “*abstencionismo electoral*”.

Se puede considerar que es contra el interés público que una sociedad se divida en fracciones cuando se sucede un proceso de elección. También, es contra el orden público que después de un proceso de elección florezcan los rencores y resentimientos entre los electores. Es contra el interés general que la sociedad civil no está legítimamente representada cuando sus sirvientes obtuvieron el triunfo electoral por la decisión de las simples minorías.

La vía de las elecciones un ciudadano común no tiene garantizada la “*igualdad de participación*”, estando por consecuencia excluido de participar en la vida política y democrática del Estado, obliga entonces, como medida para encontrar una salida a la difícil situación a hacer algo, cancelar cualesquier compromisos con los partidos y con las convocatorias que hacen estos y las instituciones electorales de los intrusos, es decir, en atención al “*derecho natural*” de la no existencia de regulación de la autonomía de la voluntad y la libertad de los particulares para pertenecer o dejar de pertenecer a un partido, se está en absoluta libertad (si es su deseo), para dejar de hacer uso de esa “*facultad concurrente*” eludiendo cualquier compromiso con los partidos y las instituciones encargadas de la organización de las elecciones.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Garantizar la igualdad de participación y la inclusión de todos los individuos (aun los menores de edad) en los procesos democráticos, implantando una nueva forma de elección más altamente democrática llamada “*demarquía*”. Esta forma de elección demárquica es más sencilla, más



altamente democrática por que no hace distinción alguna en el acceso al ejercicio de los cargos públicos de elección, es aleatoria y menos costosa.

## **12.-Rota la regla de la auténtica representatividad política no relativa ni proporcional:**

Decía Montesquieu: ...*“el pueblo solo debe hacer aquello de que es capaz: elegir a quienes ejerzan su autoridad, pero es incapaz de ejercerla por sí mismo”*.

El artículo 40 de la Constitución de 1857 estipula que: *Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,.....*

La utilidad de la figura de la *“representatividad”* por mandato para el ejercicio del gobierno, descansa sobre el hecho de una voluntad mayoritariamente expresa del pueblo, y manifestada en una elección pública. En México no existe identidad entre los términos *“representación-elección”*, esta terminología no es tan perfecta, la *“representación política”* ha degenerado y desarrollado características propias que se apartan del derecho y se adaptan a la conveniencia de los intrusos como son: a.- Irrevocabilidad. B.- Irrenunciablemente onerosa. (Artículo 36 fracción IV Constitucional). C.- Irresponsabilidad de los mandatarios respecto de sus electores. D.- Representación de todo el pueblo y no de las minorías que los designan. E.- Carencia de voluntad general de todo el pueblo. F.- Refrendable cada determinado tiempo.

Sobre la presunta irrevocabilidad del contrato de mandato constitucional, tenemos que: basados en la carta de Querétaro que los intrusos revolucionarios impusieron en 1917, y con relación a su *“pretendido carácter representativo”*, tratadistas de derecho sostienen que jurídicamente son inexistentes todos los actos celebrados por los falsos representantes, pues si tomamos como referencia supletoria las normas de derecho privado contenidas en los artículos 1802 y 2583 del Código Civil para el Distrito Federal aplicado supletoriamente, califican como *“nulos”* los actos realizados en nombre de otro por quien no es un legítimo representante, pues al faltar el consentimiento del mandante (voluntad del pueblo), se trata de una verdadera inexistencia en relación con el contrato constitucional, por ausencia de consentimiento, manifestado en un proceso de elección pública auténtico, nulidad que no puede convalidarse por el transcurso del tiempo, es decir, por prescripción.

Ahora bien, tratándose de un acto ejecutado por un *“falso representante”*, aunque de acuerdo con el artículo 1802 es nulo, a no ser que la persona a cuyo nombre hubiera sido celebrado lo ratifique antes de que se retracte la otra parte, debe estimarse que por faltar el consentimiento del supuesto representado, en realidad se está en presencia de una verdadera inexistencia, de acuerdo con los artículos 1794, fracción I, y 2224 del repetido Código Civil. Ambas constituciones, (la legítima y la Queretana) que tienen el carácter de disposiciones de orden público (no privado) reconocen el derecho

de los ciudadanos a participar en los asuntos público directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal hecha exclusión de los miembros de la Suprema Corte, los que no quedan ligados a ese tipo de mandato popular.

Invariablemente la representación del pueblo se adquiere mediante un “*mandato popular*”, y se legitima mediante la expresión en las urnas electorales de la voluntad general de la mayoría del pueblo. La concepción de este mandato, es similar al jurídico-privado, pues tiene las mismas consecuencias. Así las cosas, desempeñar un cargo de representación sin estar legitimado el derecho a desempeñarlo, es un claro fraude a la voluntad popular. Para renovar los poderes públicos no son legales los procedimientos que se estiman pacíficos como la consulta directa al pueblo, la ratificación por convenciones especiales o la reunión de asambleas cerradas llamadas “*constituyentes*” erigidas luego en colegio electoral, pues el único medio legal para representar legítimamente a un pueblo son las elecciones públicas ordinarias con base en las reglas previamente dispuestas en la Constitución de 1857 y en la Ley Orgánica Electoral de 12 de Febrero del mismo año. La auténtica representatividad bajo el sistema democrático se obtiene únicamente bajo el rigor de la fórmula matemática de la mitad más uno del total de los electores, sin embargo al no poder llenar ese requisito, los intrusos idearon otros diversos principios, como el de “representación por mayoría relativa” y el de “representación proporcional”, fórmulas perversas que no son por nada la base contable del régimen democrático que exige la ley.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Decretar inexistentes de pleno derecho todos los actos, acuerdos o hechos que los gobiernos emanados de la rebelión contrarios a la constitución que carecieron de auténtica representatividad en particular la declaratoria de los organismos electorales que resolvieron como validas las elecciones bajo el principio impuesto por los revolucionarios llamado de “*mayoría relativa*”.

### **13.-Rota la regla de la inviolabilidad constitucional:**

La Constitución de 1917 es ilegítima desde el triple punto de vista jurídico, político y revolucionario. El mecanismo legal para haber reformado la Constitución de 1857 se encontraba establecido previamente en el artículo 127 del mismo ordenamiento que dice: “*Artículo 127.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas*”;

Luego, el procedimiento ideal para renovar los poderes públicos estaba establecido en el artículo 81 de la misma Carta de 1857 que consistía en la celebración de elecciones extraordinarias. Entonces tenemos que, la ilegal constitución de 1917 no fue hecha ni por el pueblo ni para el pueblo mexicano.

Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostienen lo siguiente: *“La usurpación de Victoriano Huerta rompió el molde de la Constitución de 1857, ésta prácticamente quedó en suspenso, y sin aplicación en parte, pero no hubo ni hay ley alguna posterior que la haya derogado expresamente, por el contrario, los líderes de la revolución reconocieron su vigencia por lo cual existió como ley suprema, por más que la observancia de muchos de sus preceptos quedara en suspenso. Entre la Constitución de 1857 y la de 1917 no existe ningún lazo de unión, pues ninguno de los preceptos de ésta mandan que se acepten los de aquella; ésta, establece un orden de cosas completamente nuevo”.*

La Jurisprudencia de la Corte sostiene que: *“No tiene validez la existencia de dos constituciones en una misma época, pues no existe ninguna ley válida que haya derogado (abolido, anulado o suprimido) a la Constitución de 1857, se le ha querido sepultar pero, ni del texto de la de la de 1917 se desprende alguna referencia en ese sentido. La Constitución de 1917 jurídicamente no existe pues no pudo surgir como una nueva Constitución que substituyera a la de 1857, por que la nueva no lo dice así, ni tampoco se señala en ella que la anterior quedase derogada. No pueden existir dos constituciones en vigor y observancia en la misma época. La Constitución impuesta de 1917 no fue hecha ni por el pueblo mexicano, ni para el pueblo mexicano. La Constitución de 1917 fue un aborto espontáneo de la sub-clase social minoritaria convertida en combatientes, y en sus obras se resienten las pasiones, los odios y los rencores de esa casta neo-militar. La Constitución Queretana de 1917 es un documento inválido que en nada altera los textos originales de la Constitución legítima de 1857”.*

Lo anterior nos indica lógicamente, que los actos de una revolución no engendra efectos jurídicos válidos, es decir, no tienen eficacia, pues una revolución no está consagrada como una fuente del derecho positivo, tampoco puede ni debe romper al antiguo derecho para imponer sus propios puntos de vista, engendrados al amparo de su excitación política de la venganza contra el antiguo tenedor del poder. Ahora bien, no puede haber una vacío legal entre el poder que antes existía y la instauración del nuevo, es decir, no está reconocida alguna posible situación intermedia de “derrocamiento”, o “preparatoria” para la implantación de un nuevo régimen, además, y como es el caso de que los jueces no están en condición de hacer política, también lo es que están impedidos para ponerse al servicio de la arbitrariedad.

Con relación al pretendido principio teórico del “*Poder Constituyente*” que dijeron tener los impostores de 1917, no es tal, pues según los expertos en derecho como se sostiene en la obra de “Filosofía del Derecho” del maestro Luis Recasens Siches, establece lo siguiente: “....*no toda substitución o reforma a la constitución representa una producción originaria del derecho, ni por tanto inaugura una nuevo sistema jurídico, ni tampoco por ende, determina una solución de continuidad respecto del orden anterior. Una constitución puede ser modificada o substituida normalmente y legalmente, es decir, siguiendo para ello el procedimiento de reforma prevenido de modo explícito o tácito en la constitución anterior, esto es, en la que se modifica o reemplaza; y entonces en modo se rompe la continuidad de la vida jurídica estatal, puesto que al anterior cimiento constitucional se superpone otro nuevo engarzado con él, fundado en él; de suerte que la validez de la nueva constitución no representa algo primitivo, no es algo radicalmente original, no es algo de nueva planta, sino que se deriva de la validez de la constitución precedente, la cual sirve de fundamento a la nueva*”.

La supuesta reforma de la Constitución de 1857 hecha por los amotinados estaba limitada por barreras infranqueables: pudieron abarcarse una serie de puntos pero nunca el relativo a la titularidad legítima del supremo poder, es decir, para que una modificación constitucional pueda ser considerada como reforma legal y válida, y no como otro tipo de alteración diverso, era necesario también que se rescatara la titularidad original del supremo poder, aquel poder primitivo consagrado como legítimo que solo correspondía a la titularidad de quienes ejercieran legítimamente los tres poderes del Estado, con la anuencia del pueblo y que gobernaron hasta antes del golpe de Estado, pues los usurpadores no reunían tales presupuestos.

Al no haber tal elemento de legitimidad, lo hecho en cuanto a la pretendida reforma a la constitución de 1857, no fue tal, pues negado el fundamento de su competencia legal, (facultad) constituye un nuevo sistema jurídico, sin conexión con el anterior, lo que representa una ruptura total del orden jurídico precedente, aún en el caso de que tales cambios se hubiesen sucedido en forma pacífica.

No puede haber ninguna incertidumbre sobre quién debe ser el titular del “*poder constituyente*”, nos queda claro que los impostores, no pudieron ni podrán nunca fundar en los principios generales del derecho positivo de la Carta Fundamental de 1857; el derecho de titularidad de su pretendido poder constituyente, eso corresponde al pueblo por la vía pacífica y no a los que se colocan en calidad de delincuentes y usaron de la fuerza violenta de las armas, pues de ser así las cosas, estaríamos expuestos a que cualquier maleante configurara a su modo las leyes generales.

El Poder Constituyente, sin embargo, jurídicamente existió y existe en manos de los creadores originales, deviene de aquella concepción democrática que compete a la

comunidad nacional y que fundó las bases de la Constitución legítima de 1857 de modo plenario. El titular de ese poder es la nación mexicana, es el pueblo mismo o conjunto de sujetos que tenían conciencia de integridad nacional y voluntad de afirmarla. En verdad, el poder “*constituyente*” del pueblo no está perdido, existe y puede ser activado, ese poder ni por equivocación, aunque muchos piensen lo contrario, ha estado en manos de unos cuantos líderes de maleantes impostores, pues según la teoría democrática clásica, el poder constituyente es competencia legítima de la soberanía nacional del pueblo y de los poderes instituidos legalmente, con el acuerdo a la voluntad de las mayorías, al amparo de la competencia de su legislación constitucional plena, indivisa, inalienable, permanente, intransferible e imprescriptible, la que permanecerá siempre en potencia latente frente a la imposición de cualquier otra a todas luces ilegítima.

Habrá quien se quiera sostener de la tesis doctrinal de la legitimación por “*hecho delictivo consumado*”, de los efectos jurídicos ocurridos por los actos de la revolución, pero tal postulado, no puede tener la validez pretendida cuando se sucedió la toma del poder alterando el orden público y realizando hechos contrarios a los principios del derecho, es decir, no se pueden anteponer los hechos delictivos a las disposiciones de orden público y menos aun cuando se busca la transformación de un régimen político de gobierno, dado que el derecho positivo no garantiza tal posibilidad.

No es raro que dos o más facinerosos, pistola en mano, detengan un transporte público y roben los valores de sus pasajeros y nadie de las víctimas se atreva a resistirse; tal es en gran escala el caso de México: Por ejemplo: Se puede decir que unos viajeros fueron tomados por sorpresa, no tenían armas u oportunidad de usarlas, y ante la vida o el dinero, prefirieron este último; mas aplicado al caso del pueblo mexicano que lleva largos años de estar sometido a la opresión de los usurpadores, ha sido suficiente el tiempo para reponerse de la sorpresa y hacer algo al respecto. ¿Cómo es posible?, se preguntan propios y extraños, que se siga imponiendo un gobierno por un puñado de usurpadores que hoy no más allá de 640 aventureros “*engañadores*” de más de 105 millones de mexicanos. Los delincuentes rebeldes autollamados “*constituyentes*” de 1917 no pudieron tener tal investidura, pues la potestad del poder soberano que tienen los individuos de un pueblo según el artículo 39 Constitucional es “*INALIENABLE*”, es decir, no se transfiere a nadie que pueda llamarse “representantes”, de ahí deviene su ilegitimidad de origen.

Pensamos ingenuamente que los “*sirvientes usurpadores*” de antes, y sus cómplices que llegaron después, están bien muertos, ó que ya no existen ni trabajan en el gobierno, siendo que en la realidad usurpan nuestro pensamiento, nos oprimen a su antojo. Si es una realidad que los “*políticos muertos*” y los intrusos que vinieron después, los que ya no están trabajando en el gobierno, siguen siendo señores y

dueños de los vivos; pues en las escuelas gran parte del tiempo de enseñanza se emplea para explicar y aprender sus vicisitudes, aventuras, y vergüenzas.

La historia mexicana es un interminable libro de muertos y hechos de vergüenza. El pueblo debe obedecer códigos y fórmulas de pensamiento de los usurpadores muertos y de sus cómplices. Nuestros museos están llenos de sus obras, muchas calles llevan sus nombres, en nuestras plazas se pavonean imágenes de difuntos dizque “*famosos héroes*”, ya sea a caballo, con armas o en actitud amenazante, esas fantochadas no pueden ser la representación del orgullo de la Patria mexicana; es necesario concluir de una vez por todas, con esta engañosa y perpetua esclavitud orquestada por los impostores.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Cumplir la misión constitucional establecida en el artículo 128 de la constitución de 1857.

#### **14.-Rota la regla de procesos electorales validos:**

Son inválidos todos los procesos de elección pública celebrados por los intrusos, al margen de la Constitución de 1857. Para el caso particular de la falta absoluta del Presidente de la República Sebastián Lerdo de Tejada, y la inviolabilidad de la Constitución legítima de 1857, dicha Carta Fundamental cita lo siguiente:

*“Artículo 80.- Si la falta del presidente fuere absoluta, se procederá a nueva elección con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 76, y el nuevamente electo ejercerá sus funciones hasta el día último de Noviembre del cuarto año siguiente al de su elección”. Artículo 81.- El cargo de presidente de la Unión solo es renunciable por causa grave, calificada por el congreso, ante quien se presentará la renuncia”. Artículo 82.- Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviere hecha y publicada para el 1 de Diciembre, en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviere pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo el antiguo, y el supremo poder ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la suprema corte de justicia”.*

Al no haberse convocado a nuevas elecciones y nombrar interinamente como presidente de la República al presidente de la Suprema Corte, que en aquel entonces era Iglesias, quien por cierto no aceptó la designación que de él hizo, el General Díaz en el “*Plan de Palo Blanco*”, quedó bloqueada la prerrogativa no pudo ser ya co-extensiva de la opinión pública, debilitándose la fuerza necesaria que requiere todo mandato, es decir, se tomó el poder sin el consentimiento del pueblo, formándose un auto gobierno de la fuerza de las armas.

El uso de la fuerza de las armas no puede invocar razones de interés público, ni puede sustituir el vigor de la opinión pública que se manifiesta en los comicios electorales. La

opinión pública es el alma de la democracia, en el uso de la violencia de las armas no está representada la convicción de la voluntad general, por el contrario, es una agravante que se opone a lo que debe ser esencialmente voluntario. Es el sometimiento a las minorías políticas.

Así, el gobierno federal y el de los Estados es el gobierno de una casta, y no de un pueblo; la opinión pública no ejerce influencia alguna sobre ella y mientras no se resuelva esto, los intereses de la nación estarán desprotegidos y el pueblo seguirá siendo víctimas de mayores atropellos.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Como lo dispone la constitución legítima de 1857, legalmente procede nombrar como presidente interino de la República mexicana, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su defecto, al Secretario de Relaciones Exteriores en funciones.

#### **15.- Rota la regla de adiciones y reformas lícitas como lo marca el artículo 127 de la Constitución de 1857.**

El artículo 127 de la Constitución de 1857 establece: *“La presente constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”*.

Es claro que las adiciones y reformas hechas por los rebeldes no provenían de un Congreso de la Unión legalmente constituido, sino más bien de una reunión de amados en la ciudad de Querétaro, quienes no tenían derecho a deliberar según el artículo 9 constitucional, y por obvias razones resulta considerar ilegal cualquier aprobación o intento de aprobación de las legislaturas de los Estados, de tal suerte que el Congreso de la Unión jamás pudo hacer algún cómputo para declarar haber sido aprobadas cualquier presunta adición o reforma propuesta por dicha asamblea de insurrectos.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Llamar a decretar y decretar inválido cualquier intento de adición o reforma pretendida por los rebeldes revolucionarios reunidos en la ciudad de Querétaro, considerar dicha reunión como lo que fue realmente una simple obra de teatro, que no tiene repercusión alguna en modificar válidamente los textos originales de la Constitución de 1857, por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 127 de dicha Constitución.

#### **16.- Rota la regla de la Supremacía Constitucional establecida en el artículo 126 de la Constitución de 1857.**

El artículo 126 de la Constitución de 1857 establece: *“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la República, con aprobación del congreso; serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados”*.

Resulta evidente que las legislaturas y los Jueces de los Estados no se subordinaron a la Constitución de 1857, no se opusieron a las disposiciones de los rebeldes reunidos en Querétaro para aprobar una nueva constitución, la de 1917, es decir, omitieron hacer valer la supremacía de la Constitución de 1857 por encima de la carta bastarda de 1917.

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Llamar a decretar y decretar invalida cualquier aprobación de los congreso y legislaturas o de los jueces de los Estados, tendiente a validar las pretendidas reformas propuestas por Venustiano Carranza al pretendido Constituyente de Querétaro, establecer que éstas no son tales ni alteran el contenido substancial del texto original de la Constitución original de 1857, que los actos celebrados por los rebeldes en esa reunión prohibida por la ley, no engendran disposiciones legales validas, que se trata de una simple carta de intenciones que pugna contra las disposiciones del artículo 126 constitucional, y que los Estados no estaban en condición de subordinarse a las disposiciones de los rebeldes revolucionarios.

## OBJETIVOS SECUNDARIOS

### CONCRETAR LOS DECRETOS LEGISLATIVOS SIGUIENTES:

Se recobra la libertad del pueblo.

Se restaura la república federal.

Se restaura Estado libre y soberano SLP.

Se válida la constitución de 1857.

Es válida la elecciones federales 1876.

Es válida la elección de Don Sebastián Lerdo Tejada.

Es válido el 3er. constituyente SLP. 14/04/1861.

Es válida la 2ª constitución SLP. 27-Julio-1861



Es válida la sesión del congreso S.L.P., de 9-octubre-1861

Es válida la 1ª legislatura S.L.P., de 20-oct-1961.

Es válida destitución de Juan Bustamante en 1868.

Es válido el nombramiento de Carlos Tovar 1869 (Gob. Interino).

Es inválida la rebelión militar de 1876.

Inválidas las re-elecciones de Gral. Díaz.

Son inválidas elecciones SLP., marzo de 1877.

Fue inválida elección de Carlos Diez Gutiérrez.

Fue inválida la rebelión de 1910.

Fue inválida elección de Madero.

Fue inválida la rebelión de Huerta.

Fue inválida la rebelión de Carranza.

Fue inválida la rebelión de Calles.

Fue inválido el congreso constituyente 1917 de Querétaro.

Fue inválida la supuesta carta constitucional de 1917.

Fue inválida la 3ª constitución S.L.P., 5-octubre-1917

Fue inválida la elección de Carranza.

Son inválidos los gobiernos 1876–2020.

Fueron inválidos los congresos de la Unión IX y hasta la fecha.

Fueron inválidas legislaturas colaboradoras S.L.P.

Son inválidos los poderes ejecutivos de la Unión 1876-2020.

Son inválidos los poder ejecutivos S.L.P. (1877-2021)

Son inválidos los tribunales de la federación 1876-2020.

Son inválidos tribunales del Estado de S.L.P.

Son inválidas todas las procuradurías de justicia colaboradoras.

Inválidos todos los gabinetes de colaboradores.

Procede declarar la inexistencia jurídica de los municipios.

Es nula la legislación federal de los rebeldes.

Son nulas las legislaciones estatales de los rebeldes.

Se restaura la vigencia de la constitución legítima de 1857.

Se restaura orden constitucional del Estado S.L.P.

Se restaura vigencia constitución de S.L.P., del año 1861.

Se restaurar 1ª legislatura S.L.P. 20-oct-61/dic-1862.

Se restaurar la legislación local de S.L.P de 1861.

Se restaura el Congreso de la Unión No. IX.

Se decreta preparar el 4º constituyente de S.L.P.

Se decreta preparar el 5º constituyente de la República.

Se decreta convocar para nuevo himno federal y nuevo himno estatal.

Se decreta convocar nuevo manto sagrado federal y nuevo manto sagrado estatal.

Decretar nueva instrumentación de la guardia nacional y estatal con civiles.

Civiles nuevos jefes de la guardia nacional y estatal.

Nueva forma elección interior demarquía.

Se convalida procedimiento de “acción popular”.

El Congreso con calidad de “gran jurado”.

Delitos políticos, conoce el Congreso.

Delitos comunes conocen los Tribunales.

Son imprescriptibles los delitos políticos.

Eliminación de todo tipo de fuero estatal.

Constitución S.L.P., aplicable a enjuiciamientos.

Se libera de obedecer leyes inválidas de rebeliones.

Nuevo sistema monetario.

El salario se pagará diario y en moneda.

Medidas contra posibles amotinamientos.

Reconocimiento de derechos humanos.

Reconocimiento de derechos sociales.

Reconocimiento de derechos políticos.

Reconocimiento de derechos económicos.

Reconocimiento de derechos culturales.

Reconocimiento de garantías individuales.

Reconocimiento de garantías sociales.